

Zimbabue: La «diplomacia tranquila» de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral no debe equivaler a una aquiescencia silenciosa de las violaciones de derechos humanos

El rastro de promesas rotas en materia de derechos humanos que está dejando Zimbabue debe llevar a los miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral a no fiarse de los compromisos formulados en la Cumbre Extraordinaria de la organización, celebrada en Malawi el 14 de enero, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha declarado: «La "diplomacia tranquila" no debe convertirse en una aquiescencia silenciosa de las violaciones graves y constantes de derechos humanos cometidas en Zimbabue. El presidente Robert Mugabe ha prometido reformas de derechos humanos a la Commonwealth, a la Unión Europea y, ahora, a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, pero no hay nada que indique que la guerra de homicidios, tortura e intimidación contra la oposición política esté perdiendo intensidad. ¿Verificará la Comunidad de Desarrollo Económico las promesas que ha recibido? Y, si lo hace, ¿qué sistema empleará?».

El comunicado final de la Cumbre emitido por la Comunidad de Desarrollo Económico enumera las promesas en materia de derechos humanos formuladas por Zimbabue, promesas que incluyen el pleno respeto por los derechos humanos, el compromiso de respetar la libertad de expresión y la independencia del poder judicial y el acuerdo de acreditar a una serie de observadores nacionales e internacionales.

Sin embargo, mientras el presidente Robert Mugabe se encontraba en Malawi prometiendo mejoras en materia de derechos humanos a los dirigentes del África Austral, su partido político y su milicia (los «veteranos de guerra») intentaban asesinar a David Mpala, parlamentario del grupo de oposición Movimiento por el Cambio Democrático, y a varios activistas de la oposición.

El domingo 13 de enero del 2002, unos 20 miembros de la milicia de «veteranos de guerra» promovida por el gobierno, acompañados de partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, secuestraron al doctor David Mpala a plena luz del día en el centro de Lupane, en Matabeleland. Sus secuestradores acuchillaron al doctor Mpala y lo abandonaron fuera de la ciudad. Según los informes, la policía ha detenido a 11 sospechosos en relación con el incidente.

Un día antes, más de 70 simpatizantes del partido en el gobierno que vestían camisetas con el emblema de dicho partido atacaron una oficina del Movimiento por el Cambio Democrático en Murambinda y agredieron con hachas y cuchillos a siete presuntos partidarios de este grupo, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados con lesiones graves.

Zimbabue también había prometido a la Unión Europea el viernes 11 de enero del 2002, durante las conversaciones mantenidas en virtud del artículo 96 del acuerdo de Cotonú, que permitiría la entrada de observadores al país, y había declarado que en breve cursaría invitaciones.

Amnistía Internacional quiere subrayar que la UE pidió el acceso de observadores electorales internacionales al país seis semanas antes de las elecciones presidenciales de

Zimbabue. Eso significa que el equipo de la UE debería estar desplegado en Zimbabue antes de que termine la semana próxima. La organización de derechos humanos confía sinceramente en que Zimbabue cumplirá esa promesa, pero insta a la UE a prestar seria atención a este plazo y a pedir que el despliegue se inicie inmediatamente como parte de la respuesta de Zimbabue a la UE.

La organización de derechos humanos ha declarado: «La Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la UE y la Commonwealth deben insistir en que los observadores y los investigadores de derechos humanos sean desplegados el fin de semana próximo, a más tardar, porque es ahora, y no más tarde, cuando se debe verificar la situación sobre el terreno».

Amnistía Internacional también ha subrayado que cuando, en septiembre del 2001, Zimbabue se comprometió ante la Commonwealth en Abuja, Nigeria, a restaurar el Estado de derecho en su país, no tardó demasiado en romper sus promesas. De hecho, Zimbabue pareció intensificar la violencia promovida por el gobierno tras el acuerdo de Abuja; entre otras cosas, desplegó nuevas milicias adiestradas por el ejército bajo la cobertura de un Servicio Juvenil. El presidente Mugabe parece estar seguro de que la Commonwealth no supervisará adecuadamente la situación ni emprenderá medidas efectivas respecto a estas promesas rotas. Para contrarrestar esa idea, la Commonwealth debe insistir en que se permita a su Grupo de Acción Ministerial la entrada al país, algo que se le ha impedido hasta el momento.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los compromisos formulados en la Cumbre de la Comunidad de Desarrollo Económico corren peligro de quedarse en otro conjunto de promesas vanas. La Comunidad de Desarrollo Económico debe indicar cómo se asegurará de que existe una supervisión independiente de las medidas tomadas por el presidente Mugabe para cumplir los compromisos que ha formulado en Malawi. La Comunidad debe asimismo pedir que Zimbabue invite a los relatores especiales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos a que actúen como investigadores independientes de las denuncias de homicidios políticos, tortura, amenazas a periodistas y subversión del poder judicial».

Aunque el presidente Mugabe también se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y a permitir la libre actuación de periodistas tanto nacionales como internacionales, Amnistía Internacional ha puesto en duda la adopción de nuevas leyes que restringirán la libertad de expresión. La aprobación, la semana pasada, de la Ley de Orden Público y Seguridad penaliza las protestas políticas no violentas y establece penas de prisión para quienes «insulten al presidente» o «alteren la paz».

Amnistía Internacional ha declarado: «El mundo entero ha observado cómo un organismo intergubernamental tras otro obtienen de Zimbabue promesas de reforma mientras el gobierno de Zimbabue permite que sus ciudadanos sufran homicidios, "desapariciones" y tortura. La presión que los gobiernos africanos y europeos ejercen para que se termine con la violencia promovida por el gobierno en Zimbabue no mina la soberanía de este país, sino que reafirma las normas que todos los Estados deben respetar y defender para ser miembros de la comunidad internacional de naciones».

Información general

Extracto del texto del comunicado de la Cumbre de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral relativo a Zimbabue:

«La Cumbre acogió con satisfacción las siguientes acciones que Zimbabue iba a emprender: el pleno respeto por los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de

opinión, asociación y reunión pacífica para todos los individuos; el compromiso de investigar exhaustiva e imparcialmente todos los casos de presunta violencia política ocurridos en el 2001 y de tomar medidas al respecto; la creación de una Comisión de Supervisión Electoral de Zimbabwe dotada de recursos adecuados y capaz de actuar con independencia; la acreditación y el registro de observadores independientes nacionales con tiempo suficiente para actuar durante las elecciones; la invitación oportuna y la acreditación de una amplia gama de observadores electorales internacionales; el compromiso de respetar la libertad de expresión, tal como garantiza la Constitución de Zimbabwe; la reafirmación por parte de Zimbabwe de su práctica de permitir a periodistas nacionales e internacionales informar sobre acontecimientos nacionales importantes, como las elecciones, de acuerdo con sus leyes y normas; el compromiso del gobierno de Zimbabwe de respetar la independencia del poder judicial y el Estado de derecho; y el traslado por parte del gobierno de Zimbabwe de los ocupantes de granjas no designadas a tierras legalmente adquiridas.»

«La lista antes enumerada de acciones que serán emprendidas por las autoridades de Zimbabwe fue copiada textualmente del comunicado elaborado tras la reunión de la UE con Zimbabwe el 11 de enero del 2002. En ese comunicado, la UE subrayaba que las autoridades de Zimbabwe habían manifestado su disposición "a avanzar para abordar los motivos de preocupación de la UE con medidas concretas" sobre estos puntos, pero también manifestó que "en este punto la UE no está segura de que esos motivos de preocupación se vayan a abordar".»

\ FIN

Documento público

*** Si desean más información, pónganse en contacto con Samkelo Mkhine, encargado de prensa de Amnistía Internacional para el Sur de África, en el número + 27 83 261 2656, o con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566; también pueden visitar nuestro sitio web en: <<http://www.amnesty.org>>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: <<http://www.edai.org/centro>>.**